



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

1

DEMANDANTE:	Liliana María Vélez Restrepo
DEMANDADA:	Colpensiones y Protección S.A.
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma y adiciona
Radicado	05001-31-05-015-2022-00189-01 (038) 05001310501520220018901

Medellín, a los veinte (20) días de junio de dos mil veintitrés (2023).

AUTO

Conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos de la sustitución de poder obrante en el archivo 03AlegatosYSustitucionColpensiones-, se reconoce personería para actuar en representación de Colpensiones a la doctora Paula Andrea Chaverra Madrid con Tarjeta Profesional 37.595 del Consejo Superior de la Judicatura.

En la fecha indicada, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación de Colpensiones así como el grado jurisdiccional de consulta que se surte en su favor, frente a la decisión adoptada en primera instancia, en el proceso ordinario laboral seguido por **Liliana María Vélez Restrepo** en contra de **Colpensiones y Protección S.A.**

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES:

1.1 PRETENSIONES.

La señora **Liliana María Vélez Restrepo** presentó demanda en contra de Colpensiones y Protección S.A., buscando se declare la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS) y la validez de su afiliación al Régimen de Prima Media (en adelante RPM); en consecuencia, se ordene a Protección S.A. el traslado a Colpensiones de todos los valores que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo rendimientos, cuotas de administración, pago de seguros previsionales y demás conceptos y las costas del proceso.

1.2 HECHOS.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el día 17 de diciembre de 1973 y cuenta con 48 años de edad; que inició su vida laboral con Empresas Públicas de Medellín desde el 3 de mayo de 1993 y se trasladó al RAIS el 1° de julio de 1995 sin recibir la información necesaria por parte de Protección sobre las condiciones y diferencias de ambos regímenes para tomar una decisión, libre, voluntaria e informada, tampoco se le informó que podía regresar al RPM hasta el 17 de diciembre de 2020 y que recibió correo de la AFP el día 7 de febrero de 2020, indicando la necesidad de realizar una asesoría pero no se remitió información sobre el asunto ni la fecha límite de retorno; el día 2 de noviembre de 2022, Protección realizó la proyección de la prestación arrojando la primera mesada un (1) smImv, mientras en Colpensiones sería de \$2.105.921, finalmente, afirma que el 15 de diciembre de 2021, presentó reclamación a Colpensiones solicitando el reconocimiento de las pretensiones sin obtener respuesta de la entidad.

1.3 CONTESTACIÓN DEMANDADAS.

Admitida la demanda e integrada la litis, las demandadas allegaron respuesta oportuna, así:

Colpensiones aceptó como cierta la fecha de nacimiento y edad de la actora, su vinculación a la vida laboral, no le consta la vinculación a la AFP y la asesoría brindada para el traslado y demás hechos de la demanda por tratarse de afirmaciones relacionadas con terceros que deben ser probadas en el proceso. Se opuso a las

pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de improcedencia de declarar ineficaz la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, inexistencia de la obligación de traslado de régimen pensional por aspectos legales y financieros que impiden la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, prevalencia de la autonomía de la voluntad privada, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones en casos de ineficacia de traslado de régimen devolución de cuotas de administración, improcedencia de la obligación de pagar intereses moratorios, falta de legitimación en la causa, la prescripción y/o caducidad de la acción, imposibilidad de condena en costas, buena fe de Colpensiones y la innominada o genérica.

Protección S.A. acepta la edad y fecha de nacimiento de la demandante, las comunicaciones remitidas por la entidad y la proyección pensional realizada, no le consta la afiliación y semanas cotizadas en el ISS hoy Colpensiones ni los períodos que comprende el bono pensional, por tratarse de tiempos cotizados en otro régimen y administradora que deben ser acreditados por la Oficina de Bonos Pensionales, la afiliación realizada por la actora el 30 de junio de 1995 fue libre y voluntaria y después de recibir información clara, correcta, adecuada y suficiente de los asesores sobre el RAIS y sus condiciones conforme a la manifestación del formulario suscrito para la vinculación. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de Inexistencia de la Obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, Aprovechamiento Indevido de los Recursos Públicos y del Sistema General de Pensiones, Reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, Inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe y la innominada o genérica.

1.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 17 de febrero de 2023, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR la ineficacia del traslado de la señora LILIANA MARÍA VÉLEZ RESTREPO, identificada con la cedula de ciudadanía 43.741.818, del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad en las AFP PROTECCIÓN S.A., representada legalmente por Juan David Correa Solorzano, o quien haga sus veces

SEGUNDO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A., a trasladar a COLPENSIONES, representada legalmente por Juan Miguel Villa Lora, o quien haga sus veces, dentro de los

30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, las sumas que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la señora LILIANA MARÍA VÉLEZ RESTREPO, esto es, las respectivas cotizaciones, rendimientos, y cuotas de administración, sin incluir otros conceptos que no fueron solicitados en la demanda.

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a recibir las sumas de dinero señaladas en el numeral anterior, que le sean trasladadas por PROTECCIÓN S.A. y a activar la afiliación de la señora LILIANA MARÍA VÉLEZ RESTREPO, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en forma permanente y sin solución de continuidad.

CUARTO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción conforme lo indicado en la pare considerativa de esta sentencia y las demás formuladas por las codemandadas quedan implícitamente resueltas con lo determinado.

QUINTO: En el evento de que esta decisión no sea APELADA por COLPENSIONES se ordena el envío del proceso al Honorable Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral, para que surta el grado jurisdiccional de CONSULTA, artículo 69 del C.P.T. y de la S.S. modificado por el artículo 14 Ley 1149 de 2007.

SEXTO: las costas serán asumidas por PROTECCIÓN S.A., para lo cual se fijan las agencias en derecho a favor de la demandante en la suma de \$1´160.000, que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023.

4

1.5 RECURSO DE APELACIÓN.

La **parte demandante** interpuso recurso de apelación frente a la decisión en lo relacionado a la devolución integral por parte de Porvenir S.A., de todos los valores a que haya lugar y no solamente los pedidos en la pretensión segunda de la demanda por lo que solicita adición de la sentencia de primera instancia. Igualmente, se analiza la decisión en el grado jurisdiccional de consulta conforme al artículo 69 del CPTSS.

2. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Colpensiones, se ratificó en la contestación de la demanda y solicitó se revoque la sentencia de primera instancia por cuanto la demandante no puede ser beneficiaria del RPM administrado por la entidad y mucho menos acceder a una pensión de vejez al momento de cumplir requisitos, al realizar válidamente un traslado al RAIS con la AFP Protección, a quien corresponde resolver la eventual prestación de vejez a que haya lugar al momento del cumplimiento de los requisitos; deben desestimarse todas las pretensiones de la demanda, incluyendo la condena en costas y solicitó conforme a la jurisprudencia sobre la materia que en caso de condenar a Colpensiones a activar la afiliación de la demandante al RPM, se ordene a los fondos privados trasladar todos los aportes, incluidos los rendimientos, Bonos Pensionales, seguros provisionales, los gastos y cuotas de administración.

La **parte demandante**, indicó que la pretensión de la demanda hace alusión a la devolución de todas las sumas a que haya lugar, además la jurisprudencia ha definido que las AFP deben trasladar íntegramente todos aquellos conceptos que reposen en la cuenta de ahorro individual y que hayan recibido por el traslado de régimen, realiza un recuento sobre la responsabilidad de información a cargo de los fondos, su incidencia en materia pensional y la carga de la prueba que les asiste, por lo que solicitó la confirmación de la sentencia de primer grado concediendo la pretensión del traslado y sus consecuencias con la adición de que se ordene la devolución de todas las sumas de dinero y demás conceptos a Protección.

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO

Conoce la Sala del grado jurisdiccional de consulta de la sentencia a favor de la nación de conformidad con lo señalado en el 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala analizará, si se declara la ineficacia del traslado de la demandante Liliana María Vélez Restrepo, con el consecuente regreso al RPM administrado por Colpensiones, y, si es así, establecerá sus consecuencias.

3.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS

De acuerdo con el acervo probatorio arrimado, no hay duda que la demandante nació el 17 de enero de 1973 (folios 23-25 archivo 01Demanda); la demandante prestó sus servicios a Empresas Públicas de Medellín entre el 3 de mayo de 1993 y el 30 de noviembre de 1995 según certificado Cetil aportado (folios 43-46 archivo Ibidem); el día 30 de junio de 1995 se trasladó al RAIS administrado por Protección S.A., mediante formulario No. 0138077 (folios 26 Ibidem), cotizando un total 1.339,71 semanas según historia laboral aportada (fl. 42-55 archivo 10ConstestacionProteccion), presentó solicitud de ineficacia de traslado a Colpensiones el 15 de diciembre de 2021 (folio 41 Archivo01Demanda), la cual fue resuelta de manera negativa en comunicación del 20 de diciembre de 2021 (fl.193-194 archivo 09ContestacionColpensiones)

3.4 INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

El primer aspecto es recordar que, según el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando un empleador o cualquier persona natural o jurídica, desconozca ese derecho, se hará acreedor a las sanciones del inciso 1o del artículo 271 de la misma ley, de acuerdo con ella, cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quedará sin efecto.

Lo segundo es que, aunque la afiliación es libre y voluntaria, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de modo que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato.

Ahora, según el artículo 97, numeral 1.o del Decreto 663 de 1993, las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar información necesaria y transparente a los afiliados, «de suerte que les permita, mediante elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones informadas».

Por información necesaria, la Sala de Casación Laboral ha afirmado que comprende:

(...)la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones», y respecto a la transparencia, ha explicado que implica la obligación de dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, «los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios» (CSJ SL1452-2019, reiterada en SL1688-2019 y SL1689-2019).

El fondo de pensiones es responsable de proporcionar e indicar al usuario que pretende trasladarse de régimen, los elementos determinantes para tomar una decisión informada. En ese orden, el traslado no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la determinación de trasladarse de régimen pensional puede variar según la información que se brinde (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Por lo tanto, no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado en quien carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a sus circunstancias particulares, de manera que es insuficiente afirmar que el afiliado expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, cuando la administradora incumplió la obligación de brindarle la información necesaria, en obediencia a lo establecido en los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993.

7

Así, cuando el afiliado alega la falta de información o la mala entrega de esta por parte de la AFP, como ocurre en este caso, la administradora tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, por cuanto: «*la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo*» (artículo 1604 CC).

De tal manera que, al haberse indicado por la actora que «*no recibió la información*», por tratarse de una negación indefinida, lo releva de probar ese hecho y a su vez, traslada la carga de la prueba en el demandado, quien deberá probar en contrario, es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado.

Así, se reitera que la carga de la prueba, sin importar la circunstancia particular del afiliado, está a cargo de las AFP, toda vez que: (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento, y (iii) no es razonable invertir la carga de la prueba en contra de la otra parte de la relación contractual, ya que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto al afiliado lego (CSJ SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019 y SL4426-2019).

En ese orden, la constatación de que se cumplió con el deber de información es ineludible, por lo que la simple firma del formulario de afiliación es insuficiente para acreditar el consentimiento informado del afiliado. Este es el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, en la sentencia SL19447-2017:

el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitud y trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea» (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ3719-2021),

Ahora, el hecho de que el afiliado hubiese suscrito el formulario de vinculación o que en el mismo se empleen leyendas o afirmaciones tales como que «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares que suelen consignarse en los formatos preimpresos, no liberan a las AFP de su obligación de cumplir de manera rigurosa y de buena fe su deber de información. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).

Se insiste, que las AFP cumplan el deber de información y su acreditación en el proceso no se puede demostrar con las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado, pues ellas son insuficientes ya que quien debía probar la diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la administradora del fondo pensional (CSJ SL4964-2018).

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era Protección S.A., quien debía probar en el proceso que brindó una asesoría personalizada y completa al demandante al momento de su traslado, analizando las circunstancias particulares de su caso.

Y, es que las AFP desde su creación, tienen el deber, de suministrar información objetiva, comparada y transparente sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, como de ello da cuenta el artículo 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, en armonía con el artículo 13, literal b) de la Ley 100 de 1993 (CSJ: SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464-2019, SL4360-2019, SL2611-2020, SL4806-2020 y SL373-2021).

Deben informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta

de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la L.100/93, actualizado con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, para que la misma sea realmente libre y voluntaria.

Y es que debe reiterarse que, la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “*deber del buen consejo*”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la medida que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 D.720/94- por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, si bien Protección S.A. afirmó al contestar la demanda que a la actora se le brindó la asesoría requerida para el caso (folios 2-5 Archivo 10ContestacionProteccion), de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita, tenía la carga de acreditarlo, sin embargo, no aportó prueba que dé cuenta de la información realmente suministrada a la demandante en ese momento, adicional que, como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de **la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional**, y no con posterioridad a aquel.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, esto es, el deber de información, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho pensional, trae como consecuencia la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de aquella como que la demandante nunca se trasladó al RAIS. Razón por la que en este punto se confirmará la decisión.

3.5 CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO.

La declaratoria de ineficacia implica que las cosas vuelven al mismo estado en que se hallarían de no haber existido el cambio, esto es, se priva de todo efecto práctico al traslado *«bajo la ficción jurídica de que aquella nunca se trasladó al RAIS o, más bien, siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida»* (CSJ SL1689-2017).

Por lo tanto, considera la Sala que al declararse la ineficacia del traslado de la demandante del RPM al RAIS, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que Protección S.A. traslade a Colpensiones no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, como ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P Gerardo Botero Zuluaga. Debiéndose adicionar en este punto la sentencia de primer grado en el sentido que el saldo total de la cuenta de ahorro individual incluye también los rendimientos, el porcentaje destinado a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados.

Según el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, la Sala confirmará el fallo de primer grado donde se precisó que las obligaciones de traslado que recae el fondo privado se deberán realizar en los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia –art. 16 Decreto 692 de 1994–.

Así mismo, se adicionará la sentencia de primer grado para disponer que el traslado de los recursos que realicen los fondos privados deberá hacerse con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es,

entregando la historia laboral de la afiliada con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, “...*junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...*”.

3.6 PRESCRIPCIÓN

11

No se llama a prosperar la excepción de prescripción por cuanto la acción sobre el traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con los requisitos y valor de la pensión, por lo que se debe predicar la imprescriptibilidad de la acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada en grado de consulta se confirmará, aclarará y adicionará.

Costas de segunda instancia a cargo de Protección y en favor de la demandante por prosperar el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el 17 de febrero de 2023 revisada en apelación y en grado jurisdiccional de consulta.

SEGUNDO: Aclarar el numeral **Segundo** de la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el 17 de febrero de 2023, en cuanto a que el saldo total de la cuenta de ahorro individual que se debe trasladar incluye los

rendimientos, porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados. Así mismo se **adiciona** dicho numeral, ordenándose que la obligación de traslado impuesta a **Protección S.A.**, además de realizarse como ordenó el *a quo* dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia -art. 16 Decreto 692 de 1994-, deberá realizarse entregando la historia laboral de la afiliada con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, según las consideraciones de esta sentencia.

12

TERCERO: Costas de segunda instancia a cargo de Protección y en favor de la demandante por prosperar el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ